

Hospital Universitario de Jaén
Avda. Ejército Español nº 10
C.P 23007, JAÉN

Fecha: 21 de julio de 2023
Ref.: SPM/ACA
Asunto: Rtdo. Resolución MC 74/2023
Recurso Tribunal: 336/2023

Se notifica que con fecha 21 de julio de 2023, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía ha adoptado la Resolución de Medida Cautelar 74/2023, en relación a la solicitud de medida cautelar formulada por la **ASOCIACION PROFESIONAL DE EMPRESAS DE LIMPIEZA (ASPEL)**, en su escrito de recurso especial en materia de contratación, referente a la suspensión del procedimiento de adjudicación del contrato denominado “Servicio de limpieza, logística de gestión interna de residuos, reposición de material de higiene consumible y otros servicios complementarios descritos en el pliego de prescripciones técnicas para el Hospital Alto Guadalquivir y Hospitales de alta resolución Sierra de Segura, Alcaudete y Sierra de Cazorla, integrados en la Central de Compras de la Provincia de Jaén”, (Expte. PA 352/2023 (+6.63AKFSB) (CONTR 2023 0000573532), promovido por el Hospital Universitario de Jaén, entidad dependiente del Servicio Andaluz de Salud.

Asimismo se hace constar que la resolución remitida es copia auténtica del documento original que obra en este Tribunal.

LA SECRETARÍA DEL TRIBUNAL
(Por ausencia, artículo 8.3 del Decreto 332/2011, de 2 de noviembre. BOJA NÚM. 222 de 11 de noviembre de 2011).
JEFE DE SECCIÓN DE TRAMITACIÓN RECURSOS

Fdo: Álvaro Carrillo Alfaro



C/ Barcelona, 4-6 · 41001 Sevilla
Telf.: 671 53 08 56 - 671 53 08 53 · Fax: 955 51 50 41
comunicaciones.tarcja@juntadeandalucia.es

FIRMADO POR	ALVARO CARRILLO ALFARO	21/07/2023	PÁGINA 1/5
VERIFICACIÓN	Pk2jm88XRYCCLEZDZX8WB4KNTA9WNM	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

Recurso 336/2023

Resolución MC. 74/2023

Sección Segunda

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Sevilla, 21 de julio de 2023

VISTA la solicitud de medida cautelar formulada por la **ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE EMPRESAS DE LIMPIEZA (ASPEL)**, en su escrito de recurso especial en materia de contratación, referente a la suspensión del procedimiento de adjudicación del contrato denominado “Servicio de limpieza, logística de gestión interna de residuos, reposición de material de higiene consumible y otros servicios complementarios descritos en el pliego de prescripciones técnicas para el Hospital Alto Guadalquivir y Hospitales de alta resolución Sierra de Segura, Alcaudete y Sierra de Cazorla, integrados en la Central de Compras de la Provincia de Jaén”, (Expte. PA 352/2023 (+6.63AKFSB) (CONTR 2023 0000573532)), promovido por el Hospital Universitario de Jaén, entidad dependiente del Servicio Andaluz de Salud, este Tribunal, en sesión celebrada el día de la fecha, ha adoptado la siguiente

RESOLUCIÓN

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. El 14 de julio de 2023, se ha presentado en el Registro de este tribunal, escrito de recurso especial en materia de contratación interpuesto por la ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE EMPRESAS DE LIMPIEZA (ASPEL), contra el anuncio, la memoria justificativa y los pliegos que han de regir la licitación del contrato arriba mencionado. En su escrito de recurso, la asociación recurrente solicita la suspensión del procedimiento de adjudicación.

SEGUNDO. La Secretaría de este Tribunal dio traslado al órgano de contratación del escrito de interposición de recurso y le solicitó, entre otra documentación, las alegaciones sobre la medida cautelar de suspensión instada por la entidad recurrente. La documentación solicitada se ha recibido en este Órgano a excepción de las alegaciones a la medida cautelar instada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. La asociación recurrente solicita la medida cautelar de suspensión en su escrito de interposición del recurso especial en materia de contratación, por lo que ha de estarse, respecto a su tramitación y adopción, a lo



FIRMADO POR	ALVARO CARRILLO ALFARO	21/07/2023	PÁGINA 2/5
VERIFICACIÓN	Pk2jm88XRYCCLEZDZX8WB4KNTA9WNM	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

dispuesto en los artículos 49 y 56.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP).

SEGUNDO. Las medidas cautelares, como señala el artículo 49.1 de la LCSP, irán dirigidas a corregir infracciones del procedimiento o impedir que se causen otros perjuicios a los intereses afectados y podrán estar incluidas, entre ellas, las destinadas a suspender o a hacer que se suspenda el procedimiento de adjudicación del contrato o la ejecución de cualquier decisión adoptada por los órganos de contratación.

Al respecto, la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no ha tenido oportunidad de pronunciarse con frecuencia sobre la adopción de medidas cautelares en el marco de los procedimientos de adjudicación de contratos, si bien los escasos pronunciamientos resultan de enorme interés. En este sentido, en el asunto C-424/01 (ATJ de 9 de abril de 2003), el Tribunal de Justicia se pronuncia sobre la ponderación que debe llevarse a cabo para justificar la adopción de la medida, indicando que la Directiva 89/665/CEE no prohíbe la previa ponderación de las posibilidades de que, con posterioridad, pudiera prosperar una pretensión de anulación de la decisión de la entidad adjudicadora con base en su ilegalidad, por lo que queda en manos del Derecho nacional la regulación de esta exigencia.

Ciertamente, la regulación de las medidas cautelares en la legislación de contratos públicos no define los parámetros a tener en cuenta para su adopción o denegación. Es por ello que debe acudir con carácter supletorio a lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas sobre suspensión de la ejecución del acto impugnado y a la propia doctrina del Tribunal Supremo en la materia –se citan las Sentencias de 25 de febrero de 2011 y de 26 de septiembre de 2011 (RJ 2011\11\1653 y RJ 2011\7212) –, pues los principios asentados por el Alto Tribunal con relación al proceso cautelar cabe entenderlos de aplicación en el marco de este procedimiento.

Así, el Tribunal Supremo señala que toda decisión sobre las medidas cautelares debe adoptarse ponderando las circunstancias del caso y teniendo en cuenta la finalidad de la medida cautelar y su fundamento constitucional, que puede resumirse en los siguientes puntos:

- **Necesidad de justificación o prueba, aún incompleta,** de aquellas circunstancias que puedan permitir al Tribunal efectuar la valoración de la procedencia de la medida. La mera alegación sin prueba no permite estimar como probado que la ejecución del acto impugnado pueda ocasionar perjuicios de imposible o difícil reparación.
- **El periculum in mora:** es decir, la medida ha de ir encaminada a asegurar que la futura resolución del procedimiento principal pueda llevarse a la práctica de modo útil.
- **Ponderación de los intereses concurrentes:** se debe ponderar, ante todo, la medida en que el interés público exija la ejecución, para otorgar o no la suspensión según el grado en que dicho interés esté en juego. En definitiva, cuando las exigencias de ejecución que el interés público presenta son tenues bastarán perjuicios de escasa entidad para provocar la suspensión; por el contrario, cuando aquella exigencia es de gran intensidad, solo perjuicios de elevada consideración podrán determinar la suspensión de la ejecución del acto.



FIRMADO POR	ALVARO CARRILLO ALFARO	21/07/2023	PÁGINA 3/5
VERIFICACIÓN	Pk2jm88XRYCCLEZDZX8WB4KNTA9WVNM	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

- **La apariencia de buen derecho (fumus boni iuris):** supuso una gran innovación respecto a los criterios tradicionales utilizados para la adopción de las medidas cautelares, si bien la Jurisprudencia del Tribunal Supremo viene limitando, tras la entrada en vigor de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1998, la aplicación del principio a aquellos supuestos en que el acto impugnado evidenciaría un error de tal naturaleza y magnitud que en sí mismo es causa suficiente para provocar la suspensión de la ejecución del acto, sin necesidad de aventurarse en enjuiciamientos más profundos, propios ya de un análisis de fondo.

TERCERO. En el supuesto analizado, la asociación recurrente solicita la medida cautelar de suspensión del procedimiento de adjudicación hasta la resolución del presente recurso, en aras de garantizar su efectividad y evitar que se produzcan perjuicios de imposible o muy difícil reparación a los intereses afectados.

En concreto, alega los perjuicios que su continuación podría causar a los potenciales licitadores del sector, a la propia Administración y a los trabajadores adscritos al servicio, dados los efectos que conllevaría una eventual anulación de los actos impugnados si se hubiera producido ya la adjudicación del contrato e, incluso, iniciado su ejecución.

Además, pone de manifiesto que los motivos invocados en su escrito de recurso afectan e infringen los principios de publicidad, de transparencia y de concurrencia, impidiendo su inobservancia que la licitación y, consecuentemente, el futuro contrato, se desarrollen con las mínimas garantías que exige la normativa comunitaria e interna de aplicación.

Por último, pone de relieve que la suspensión del procedimiento de adjudicación solicitada permitiría corregir las infracciones y defectos invocados en su escrito de recurso, en relación con el presupuesto base de licitación, el valor estimado y el precio del contrato, permitiendo que la adjudicación del contrato licitado se realice con pleno respeto a los principios esenciales de los contratos del sector público y con mayores garantías para una correcta ejecución de aquel.

Por su parte, el órgano de contratación no ha realizado alegación alguna a la solicitud de suspensión de la licitación instada por la asociación recurrente.

Pues bien, se ha de indicar que el proceso cautelar en el marco del procedimiento principal del recurso especial va esencialmente dirigido a asegurar la eficacia de la resolución de este último, previéndose además breves plazos legales para la tramitación del recurso, a diferencia de lo que ocurre en el procedimiento judicial cuya tramitación es más compleja y su duración más prolongada. Es por ello por lo que las medidas cautelares en el seno del recurso especial no han de serlo por un lapso dilatado, lo que ya supone de partida un menor riesgo o perjuicio para el interés público que demanda la adjudicación y formalización del contrato.

De otro lado, no puede obviarse que, según tiene manifestado el Tribunal Constitucional, el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24.1 de la Constitución se satisface facilitando que la ejecutividad del acto administrativo pueda ser sometida a la decisión de un Tribunal y que este, con la información y contradicción que resulte menester, resuelva sobre la suspensión. En este sentido, la Sentencia 78/1996, de 20 de mayo, señala que *«La ejecución inmediata de un acto administrativo es, pues, relevante desde la perspectiva del art. 24.1 de la CE ya que si tiene lugar imposibilitando el acceso a la tutela judicial puede suponer la desaparición o pérdida irremediable de los intereses cuya protección se pretende o incluso prejuzgar irreparablemente la decisión final del proceso causando una real indefensión»*

En el presente supuesto, la ausencia de alegaciones a la suspensión por parte del órgano de contratación impide a este Tribunal disponer de la información suficiente para poder determinar en qué medida la suspensión solicitada afecta al interés público, no pudiendo valorar qué interés resulta más digno de protección, si el interés público de la Administración o los intereses particulares de la recurrente.



FIRMADO POR	ALVARO CARRILLO ALFARO	21/07/2023	PÁGINA 4/5
VERIFICACIÓN	Pk2jm88XRYCCLEZDX8WB4KNTA9WNM	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

Por tanto, a la vista de lo anterior, este Tribunal considera que, a los solos efectos de la tutela cautelar y sin perjuicio del ulterior análisis de fondo de los motivos del recurso que se efectúe en el procedimiento principal, la suspensión de la licitación es el mejor remedio para asegurar la eficacia de la resolución del recurso en caso de una eventual estimación de este.

Por todo lo expuesto, este Tribunal,

ACUERDA

PRIMERO. Adoptar la medida cautelar de suspensión del procedimiento de adjudicación del contrato denominado “Servicio de limpieza, logística de gestión interna de residuos, reposición de material de higiene consumible y otros servicios complementarios descritos en el pliego de prescripciones técnicas para el Hospital Alto Guadalquivir y Hospitales de alta resolución Sierra de Segura, Alcaudete y Sierra de Cazorla, integrados en la Central de Compras de la Provincia de Jaén”, (Expte. PA 352/2023 (+6.63AKFSB) (CONTR 2023 0000573532)), promovido por el Hospital Universitario de Jaén, entidad dependiente del Servicio Andaluz de Salud.

SEGUNDO. Acordar la suspensión del plazo concedido para la presentación de ofertas o proposiciones por los interesados, de conformidad con lo establecido en el artículo 49.4 de la LCSP.

NOTIFÍQUESE la presente resolución a las partes interesadas en el procedimiento.

De conformidad con el artículo 49.2 de la LCSP, contra la presente resolución no cabe recurso alguno, sin perjuicio del que proceda contra la resolución que se dicte en el procedimiento principal de recurso.



FIRMADO POR	ALVARO CARRILLO ALFARO	21/07/2023	PÁGINA 5/5
VERIFICACIÓN	Pk2jm88XRYCCLEZDZX8WB4KNTA9WNM	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	